



ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES

RESOLUCIÓN NÚMERO 148802 DE 2025

(06 de noviembre 2025)

"Por medio de la cual se resuelve revocatoria contra la resolución No. 36243 del 2 de mayo de 2025"

EL DIRECTOR DE OTRAS PRESTACIONES DE LA ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el párrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Que el Director de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, mediante **Resolución No. 36243 del 2 de mayo de 2025**, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero al señor **DHIUSTOM JOSÉ BETIN CASTRO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1065638555**, un valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$7.891.946,84)**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamación y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a la reclamación generada por el accidente de tránsito ocurrido el día **2022-11-27** en el cual se vio involucrado el vehículo de placa **GAD91E**, de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2. Que el día 03 de octubre de 2025 se notificó por aviso el contenido de la **Resolución No. 36243 del 2 de mayo de 2025**, al señor **DHIUSTOM JOSÉ BETIN CASTRO**.
- 1.3. Que el señor **DHIUSTOM JOSÉ BETIN CASTRO**, interpuso solicitud de revocatoria directa en contra de la **Resolución No. 36243 del 2 de mayo de 2025**, con radicado No. 20256306035052 del 29 de octubre de 2025, argumentando entre otras cosas; la vulneración del debido proceso.

2. PROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA

En prevalencia de los derechos al debido proceso y de defensa y contradicción de que son titulares las personas naturales y jurídicas inmersas en un proceso como el que nos ocupa, se procedió a revisar las piezas procesales, encontrando:
Que el artículo 93 de la Ley 1437 del 2011, consagra que:

"CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

La revocatoria es la prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la Constitución, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a alguna persona. Así mismo, en tanto que la administración puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en la ley y está facultada para hacerlo en cualquier momento; adicionalmente es una obligación que forzosamente debe asumir en los eventos en que, de oficio, constate la ocurrencia de una de las causales señaladas. Si así fuere, la administración tiene el deber de revocar el acto lesivo de la constitucionalidad o legalidad o atentatorio del interés público o social o que causa agravio injustificado a una persona.

Sobre el particular, la Corte Constitucional mediante **Sentencia del 18 de noviembre de 2020 (Rad. 25001-23-42-000-2014-04437-01)**, precisa sobre la revocatoria directa lo siguiente:

"(...) En relación con la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, la Ley 1437 de 2011, artículo 93, establece, en forma precisa las causales que imponen a la Administración dicha revocatoria, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las siguientes: Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la Constitución o la ley, esto es, que la oposición sea grosera, de bulto, es decir, cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos administrativos, por parte de esta Jurisdicción. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraría esos intereses generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél, vinculándose a la noción del mérito del acto administrativo. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una persona. (...) los actos administrativos de carácter particular y concreto no podrán ser revocados sin el consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular, pues dichos actos implican la creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada. (...)"

Así mismo, la **sentencia 2013-00577 de 2020** proferida por el Honorable Consejo de Estado dispuso lo siguiente: **"De la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto.**

En relación con los actos administrativos conviene recordar que se constituyen en la expresión unilateral de la voluntad de la Administración, dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.

Tanto los actos administrativos generales y abstractos como los particulares y concretos, pueden ser sustraídos del mundo jurídico por cuenta de las mismas autoridades administrativas que los profirieron, bien sea de oficio o a solicitud de parte, cuando como expresamente lo ordena el Artículo 69 del CCA: sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o la ley; no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él; o si con ellos se causa agravio injustificado a una persona.

Específicamente en cuanto a los actos de contenido particular y concreto, se debe precisar que la Administración puede revocarlos, bien sea de manera directa o demandando su propio acto a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, siempre y cuando se configuren las causales anteriormente descritas de que trata el Artículo [69](#)".

En relación con el debido proceso, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-980 de 2010, ha señalado que el mismo no solo aplica al procedimiento judicial sino también a todas las actuaciones administrativas, y con ello a todo el actuar de la administración pública: *"... la Constitución extiende la garantía del debido proceso no solo a los juicios y procedimientos judiciales, sino también a todas las actuaciones administrativas. Ello significa, que el debido proceso se mueve también "dentro del contexto de **garantizar la correcta producción de los actos administrativos, y por ello extiende su cobertura a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública**, en la realización de sus objetivos y fines estatales, es decir, cubija a todas sus manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las peticiones que realicen los particulares, a los procesos que por motivo y con ocasión de sus funciones*

cada entidad administrativa debe desarrollar y desde luego, garantiza la defensa ciudadana al señalarle los medios de impugnación previstos respecto de las providencias administrativas, cuando crea el particular, que a través de ellas se hayan afectado sus intereses". (Negrilla y subrayado fuera de texto).

El Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Cuarta de 25 de octubre de 2017 se pronunció sobre las modalidades de revocatoria directa en la **Sentencia 73001-23-31-000-2008-00237-01** señalando lo siguiente:

"(...) No obstante, del examen de la normativa positiva que la regula (artículos 69 a 74 del Código Contencioso Administrativo) se puede concluir que tiene dos modalidades: de un lado, como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior y, de otro, como medida unilateral de la Administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. En el segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la Administración de manera oficiosa, bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para revisar y corregir la manifiesta antijuridicidad, inconveniencia, o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Es, en efecto, un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador, con el fin de revisar sus propias actuaciones y, dentro del contexto de la actuación oficiosa, sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas". Mediante esta figura, la Administración, de oficio o a solicitud de parte, deja sin efecto los actos administrativos expedidos por ella misma, por las causales y conforme con el trámite consagrado en la ley. (Negrilla y subrayado fuera de texto). (....)"

3. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos. En este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, **o con cargo a la Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados.**

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **al FOSYGA - Subcuenta ECAT, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o superados los topes en lo que faltase.**

La facultad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas, procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la

obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente". (Lo subrayado es fuera de texto).

Sobre el particular, es necesario reiterar, lo señalado en la **Resolución No. 36243 del 2 de mayo de 2025**, en el sentido de informar que, el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a su favor correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente**.

Asimismo, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente - SOAT, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la **Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES**, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho
- b) No contar con la póliza SOAT
- c) Existencia de víctimas

Situación que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día **2022-11-27** y del cual se realizó el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, y se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, la ADRES pagara la reclamaciones Nos. 1774896 -1815314 contenidas en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de determinación del deudor contra del señor **DHIUSTOM JOSÉ BETIN CASTRO**, propietaria para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado.

De otra parte, se precisa que para poder ordenar el cobro contra los **propietarios y/o conductores** cuyos vehículos se vieron involucrados en accidentes de tránsito y no tenían una póliza SOAT legal y vigente al momento de los hechos, resulta necesario el reconocimiento y pago de reclamaciones a la IPS o a las o a los beneficiarios cuando se presente fallecimiento conforme al artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023 se tiene que:

"El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la ADRES será de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema."

Es decir que, previo a desplegar las actuaciones administrativas tendientes a iniciar el cobro en contra de los obligados, las IPS deben efectuar la radicación de las reclamaciones ante la Entidad, para luego, en cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución 1645 de 2016 y la ley 1753 de 2015, la Administradora de los Recursos del Sistema

General de Seguridad Social en Salud – ADRES, realiza la auditoria de las reclamaciones que son presentadas, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y necesarios para corroborar la información del siniestro ocurrido; es por ello que, frente a las reclamaciones fundamento de la obligación que recae a nombre del obligado, esta administración realizó el respectivo trámite de auditoria una vez radicada, de la cual se constataron las condiciones necesarias y se procedió a su aprobación y posterior pago a la entidad reclamante.

Luego de concluido el trámite anterior, y teniendo en cuenta que la ley 1066 del 29 de julio de 2006 en su artículo 5 dispone:

"FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS. *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario".*

3.1 FALSA MOTIVACIÓN Y ERROR EN LOS HECHOS

El acto administrativo objeto de impugnación no presenta vicios de falsa motivación ni error en los hechos. Por el contrario, la ocurrencia del accidente de tránsito que dio origen a la obligación se encuentra plenamente acreditada dentro del expediente, en virtud de las pruebas recaudadas.

De acuerdo con el artículo 143 de la Ley 1438 de 2011, para acreditar la ocurrencia de un accidente de tránsito ante las compañías aseguradoras del SOAT, o en su defecto ante la ADRES - Subcuenta ECAT cuando se trate de vehículos no asegurados, basta con la declaración o informe del médico que atendió la urgencia. La norma establece que dicho documento constituye prueba suficiente para acreditar el evento generador de la atención médica.

En consecuencia, no resulta exigible la existencia de informe de tránsito, croquis o denuncia penal, por cuanto el soporte médico es prueba idónea y suficiente. En este caso, la historia clínica allegada da cuenta del ingreso del recurrente al servicio de urgencias, de las lesiones compatibles con accidente de tránsito y de su calidad de conductor del vehículo involucrado, lo cual acredita la realidad del hecho.

En virtud de lo anterior, el acto administrativo se encuentra debidamente motivado, sustentado en prueba legalmente válida y acorde con los principios de veracidad y suficiencia probatoria que rigen la actuación administrativa, conforme a los artículos 36 y 40 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

3.2 VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

No se observa vulneración del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ni de las garantías procedimentales previstas en los artículos 3, 34, 35 y 69 del CPACA.

Del análisis del expediente se evidencia que el acto administrativo fue notificado al administrado mediante aviso electrónico enviado al correo electrónico previamente registrado y utilizado en comunicaciones anteriores, conforme lo autoriza el artículo 69 del CPACA. Dicha disposición reconoce plena validez a la notificación electrónica siempre que el ciudadano haya suministrado voluntariamente una dirección electrónica o haya actuado a través de medios digitales en el procedimiento.

Asimismo, se encuentra probado que el interesado respondió la comunicación y solicitó prórroga para interponer recurso, bajo el radicado No. 20256605634852. Este hecho demuestra conocimiento efectivo del acto administrativo y ejercicio del derecho de defensa, lo cual excluye cualquier alegato de indefensión.

Sin embargo, el administrado no presentó recurso dentro del término legal, motivo por el cual el acto quedó en firme conforme al artículo 87 del CPACA. La firmeza implica la consolidación de los efectos jurídicos del acto, y la imposibilidad de revivir términos procesales por negligencia de la parte interesada.

En consecuencia, la entidad garantizó de manera efectiva el derecho al debido proceso, la contradicción y la defensa. La omisión en el uso de los mecanismos de impugnación disponibles no puede atribuirse a la administración ni constituye causal de nulidad del acto.

3.3 INEXISTENCIA DE SOPORTE PROBATORIO DEL DAÑO

El argumento relacionado con la supuesta falta de soporte probatorio carece de fundamento. El expediente contiene la documentación médica y administrativa que acredita tanto la ocurrencia del siniestro como los costos asociados a la atención prestada.

Conforme a lo establecido en el Decreto 780 de 2016, en especial las disposiciones que regulan la operación de la Subcuenta ECAT del Fondo de Solidaridad y Garantía (hoy administrado por la ADRES), corresponde a esta entidad asumir los pagos derivados de la atención de víctimas de accidentes de tránsito en los cuales intervienen vehículos no asegurados.

En desarrollo de esa competencia, las entidades prestadoras de servicios de salud remiten las facturas, soportes clínicos y registros de atención, los cuales son objeto de auditoría técnica y financiera. Solo una vez verificada la correspondencia entre los servicios prestados, la atención médica y el evento reportado, se reconoce el valor respectivo.

De esta manera, el acto administrativo cuestionado se fundamenta en pruebas documentales verificables, auditadas y soportadas en la historia clínica, lo que otorga certeza y liquidez a la obligación, conforme a los requisitos exigidos por el artículo 99 del CPACA para la conformación del título ejecutivo.

Por tanto, no existe falta de soporte probatorio, ni indeterminación en los valores reconocidos, pues la decisión se apoya en evidencia objetiva y en el marco normativo que regula la materia.

3.4 VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE

Tampoco se advierte desconocimiento del principio de buena fe previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, que rige las actuaciones tanto de los particulares como de las autoridades públicas.

La entidad actuó bajo la presunción de veracidad de los documentos oficiales aportados por las instituciones de salud, cuya autenticidad y validez no han sido desvirtuadas por el administrado. La actuación administrativa se basó en hechos comprobados mediante documentos públicos y privados con plena fuerza probatoria, conforme al artículo 243 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 40 del CPACA.

Además, la historia clínica que reposa en el expediente identifica al recurrente como conductor y víctima del siniestro, circunstancia que evidencia su doble condición y permite establecer la relación causal entre su conducta y el daño. Por tanto, la entidad no actuó con presunción de responsabilidad sino en cumplimiento de su deber legal de recuperar los recursos del sistema general de seguridad social en salud frente a eventos atribuibles a particulares.

El principio de buena fe no exonera del cumplimiento de las obligaciones derivadas de actos administrativos válidamente expedidos, ni convierte en inexistente la prueba obrante. En consecuencia, no se configura vulneración alguna de dicho principio.

3.5 FALTA DE PUBLICIDAD EFECTIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

No se presenta falta de publicidad ni irregularidad en la notificación del acto administrativo. La notificación por aviso electrónico fue realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del CPACA, dentro del término legal y utilizando la dirección electrónica registrada por el administrado.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la notificación electrónica tiene plena validez y surte efectos cuando se acredita que el destinatario tuvo acceso o conocimiento efectivo del acto. En el presente caso, la respuesta del administrado solicitando prórroga constituye evidencia suficiente de que la notificación se surtió en debida forma.

La finalidad de la notificación es garantizar el conocimiento del acto y permitir el ejercicio del derecho de defensa; cuando dicho conocimiento se acredita, carece de fundamento alegar falta de publicidad.

Por lo anterior, la notificación cumplió con los requisitos legales, produjo efectos jurídicos válidos y permitió la firmeza del acto administrativo.

De conformidad con las consideraciones expuestas, esta entidad concluye que el accidente de tránsito efectivamente ocurrió y se encuentra acreditado con la historia clínica y el informe médico, de conformidad con el artículo 143 de la Ley 1438 de 2011; que no se configuró vulneración al debido proceso, dado que la notificación se realizó conforme a la ley y el interesado tuvo conocimiento efectivo del acto; que el acto administrativo cuenta con soporte probatorio suficiente y reúne los requisitos de certeza, liquidez y exigibilidad exigidos por el CPACA; que no se vulneró el principio de buena fe, pues la actuación se basó en documentos auténticos y en el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad; y que la notificación fue válida y eficaz, garantizando la publicidad y oponibilidad del acto. En consecuencia, se ratifica la legalidad, validez y ejecutoriedad del acto administrativo expedido, razón por la cual no prosperan las pretensiones del recurrente.

Finalmente se indica, que contra la presente providencia no procede recurso alguno, de conformidad con en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la **Resolución No. 36243 del 2 de mayo de 2025**, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR al señor **DHIUSTOM JOSÉ BETIN CASTRO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1.065.638.555**, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
DHIUSTOM JOSÉ BETIN CASTRO	mc3966261@gmail.com	BOGOTA/D.C.



RESOLUCIÓN NÚMERO 148802 DE 2025

HOJA No. 8 de 8

ARTÍCULO TERCERO: INDICAR que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C, a los (06) días del mes de noviembre de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Firmado Digitalmente por

Yasmín Escamilla B.

Directora (E) de Otras Prestaciones

YASMÍN ESCAMILLA B.

Directora (E) de Otras Prestaciones

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) – ADRES

